

A juzgar por las noticias que están difundiendo determinados sectores empresariales, parece que el desarrollo económico de nuestro país se enfrenta a una grave amenaza: el Protocolo de Kioto. El mensaje que parte de esas compañías, casualmente las de mayor nivel de emisiones, es que Kioto es injusto, carísimo, imposible de cumplir y que traerá como consecuencia la quiebra de empresas y la pérdida de empleos. O sea que estábamos equivocados, que el problema no es el cambio climático, el verdadero problema es Kioto.

Esos mensajes salen a relucir en el año en que todos los países de la Unión Europea estamos obligados a poner en práctica una novedosa Directiva. Esta normativa exige asignar a cada uno de los sectores económicos que más contribuyen a emitir CO₂ unos “derechos de emisión”, es decir, una cantidad de emisiones que pueden producir libremente y que, si se sobrepasa, habrá que pagar mediante sanciones y mediante la compra a otras empresas o países de los derechos que a otros les sobren. Es lo que se conoce como el comercio de emisiones, que es una de las herramientas con las que los europeos hemos decidido hacer frente al compromiso de reducción de emisiones contraído en Kioto.

Algunas poderosas asociaciones empresariales dicen que España no puede cumplir Kioto porque hemos crecido mucho más de lo que se pensaba cuando a nuestro país se le asignó la cuota de “1990 + 15%”. Pero es difícil que el mundo entienda que un país, al que se le permitió aumentar sus emisiones más que a ningún otro (Kioto obliga a la mayoría de los países desarrollados a reducir, no sólo a limitar el aumento de sus emisiones), pretenda no poder cumplir porque ha descubierto que es más rico de lo que auguraba. Sólo los Estados Unidos de Bush, el presidente de las grandes petroleras, defienden argumentos parecidos. Además, el aumento de emisiones en España desde 1990 hasta la actualidad, ha crecido 35 puntos respecto a la media europea, mientras el PIB ha crecido 8 puntos más. Es decir, el mayor crecimiento económico no explica el aumento desorbitado de las emisiones.

Ante esta realidad, las reacciones de las empresas no son unánimes, como estamos comprobando. Las hay que afirman que es posible, además de necesario, cumplir con Kioto. Estas empresas, de las que hay muchas en la Unión Europea, no están dispuestas a admitir que, una vez diseñada una estrategia o incluso habiendo realizado cuantiosas inversiones sobre la base de los compromisos ratificados por los estados en el marco del Protocolo de Kioto, se pueda ahora hablar alegremente de cambiar las reglas del juego para favorecer precisamente a aquellos que en su día hicieron oídos sordos a lo que Kioto significaba y decidieron continuar adelante como si nada. Esta es una de las razones por las que cualquier partido con pretensiones de gobernar el país debe de asegurar que mantendrá el compromiso de Kioto y pondrá todos los medios para cumplirlo.

Pero hay razones mucho más trascendentes que las puramente económicas. El verdadero problema que tenemos encima es el cambio climático. Todos los días encontramos nuevos datos que nos alertan del caos climático que la humanidad está provocando con la quema masiva de combustibles fósiles. Por mencionar algunas de las más

recientes, los glaciares de Suiza se han derretido en 2003 más que nunca, algo que confirma la alarmante reducción generalizada de los hielos del planeta. Otra: para mediados de este siglo, el cambio climático puede haber provocado la extinción de una cuarta parte de las especies vivas. Estamos hablando no sólo de especies exóticas que mueven nuestra sensibilidad, también perderemos gran parte de las especies animales y vegetales de las que dependemos para nuestro propio sustento. ¿Qué agricultura podrá sobrevivir a un clima más seco, cálido y con más plagas? ¿Y qué turismo aguantará veranos más tórridos mientras desaparecen las playas por la subida del nivel del mar?

¿Volver a empezar?

Los ataques a Kioto vienen precisamente de aquellos que más contaminan, conscientes de lo que Kioto implica. Quieren renegociar un nuevo acuerdo para poder seguir incrementando sus ganancias mientras se sigue acumulando CO₂ en la atmósfera. Pero cualquier escenario que no parta de cumplir Kioto tal como está supone acumular un retraso dramático en la respuesta al problema. Sería dejar la “pata caliente” en manos de nuestros hijos. Pero ellos ya poco podrán hacer.

El Protocolo de Kioto, con todas su imperfecciones, no sólo es el único instrumento que tenemos para hacer cambiar la trayectoria que nos conduce al suicidio climático planetario. Las dificultades y resistencias que están surgiendo en su aplicación ponen de manifiesto que su alcance tiene una trascendencia que parecía insospechada: permite que nuestro sistema económico internalice los límites de nuestro modo de crecer. O limitamos nuestro crecimiento a aquel que sea compatible con lo que la Naturaleza puede soportar, o dejaremos de crecer porque nuestra propia economía colapsará. Estamos en una carrera por la supervivencia, en la que no podemos permitir que los beneficios económicos de los “dinosaurios” anclados en los combustibles fósiles acaben con el clima del planeta, y así con todos nosotros. Y tampoco podemos admitir que la sociedad pague los costes, vía subvenciones o impuestos, de unas medidas que deben adoptar las empresas que eligieron seguir contaminando.

Al final, las empresas aumentarán o reducirán sus emisiones según lo que les cueste hacer lo uno o lo otro. La clave del éxito del comercio de emisiones está en conseguir que la tonelada de CO₂ sea lo suficientemente cara como para que sea más rentable invertir en evitar esa tonelada que en pagar lo que cueste el derecho a emitirla. El plan de asignación de esos derechos debe hacerse bajo esa perspectiva. Habrá beneficiados y perjudicados. La cuestión es que los beneficiados sean aquellos que aporten soluciones para reducir la dependencia de las energías sucias, y con ellos toda la sociedad.

Para salvar el clima tenemos que defender el Protocolo de Kioto. Desde Greenpeace llamamos a todos los ciudadanos, entidades públicas y privadas, empresas, asociaciones, partidos..., a unir fuerzas en torno a este interés común. Ahora o nunca.

Juan López de Uralde
Director Ejecutivo
Greenpeace